**ORDENANZA LOCAL DE LA VILLA DE BILBAO SOBRE
PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA**

ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, en su sesión plenaria ordinaria celebrada el día 27 de Abril de 2007, ha aprobado, con carácter definitivo, la ORDENANZA LOCAL SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.

Dicha ordenanza fue publicada en el B.O.B. nº 85, de fecha 2 de mayo de 2007

PREÁMBULO

La presente Ordenanza se dicta, por un lado, en ejercicio de las competencias atribuidas al municipio en el artículo 25.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, donde se le atribuye competencia en materia de seguridad en lugares públicos dentro de los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas y, por otro lado, en ejercicio de lo previsto en el artículo 29. 2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, donde se establece que para la concreción de las conductas sancionables, las Ordenanzas Municipales podrán especificar los tipos que corresponden a las infracciones cuya sanción se atribuye en este artículo a la competencia de los Alcaldes, siempre dentro de la naturaleza y los límites a los que se refiere el artículo 129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Atendiendo y respetando el marco competencial expuesto, este Ayuntamiento pretende mediante la presente Ordenanza sancionar conductas lesivas a la seguridad ciudadana y orden público, con la finalidad de garantizar una pacífica convivencia, y que conductas contrarias a la misma tengan una respuesta sancionadora contundente, a fin de que no queden impunes aquellos comportamientos incívicos que sin llegar a tener la consideración de infracción penal, que duda cabe de que comportan un grave perjuicio a los ciudadanos que no tienen el deber jurídico de soportarlos.

Por ello, y conforme y a la legislación habilitante, corresponde a los Alcaldes la sanción por las infracciones leves consistentes en:

- La exhibición de objetos peligrosos para la integridad física de las personas con la finalidad de causar intimidación.
- Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana cuando ello no constituya infracción penal.
- Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos
- Todas aquellas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana o en leyes especiales relativas a la seguridad ciudadana.

Considerando lo expuesto, el objeto de la presente Ordenanza es la descripción típica de conductas y actos susceptibles de ser encuadrados en las infracciones expuestas, determinándose a su vez la sanción que conlleva la comisión de dichos comportamientos.

Para la emisión de la presente Ordenanza se atiende asimismo a lo recogido en los artículos 4 y 84 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, que faculta a los Ayuntamientos para intervenir la actividad de los ciudadanos. Y para vigilancia y cumplimiento de las disposiciones establecidas, en la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, se contempla en el artículo 27.1.d) como función de las Policías

Municipales, la de policía administrativa, en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones y actos municipales dentro de su ámbito de competencia.

TITULO I

DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1.—Fundamento de la regulación

La presente Ordenanza se fundamenta en la protección de la seguridad ciudadana y el orden público, a fin de garantizar una pacífica convivencia.

Artículo 2.—Objeto de regulación

La presente Ordenanza tiene por objeto concretar conductas contrarias a la seguridad ciudadana y al orden público dentro de los marcos competenciales de la legislación Estatal y Autonómica, prohibiéndolas y estableciendo sanciones a sus incumplimientos.

TITULO II

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 3.—De las infracciones

a) Constituyen infracciones las siguientes:

1. Exhibir objetos peligrosos para la integridad física de las personas con la finalidad de causar intimidación.

A estos efectos, se entiende por objeto peligroso cualquier instrumento que con independencia de su tamaño, forma, características o materiales con que esté fabricado, sea susceptible de causar daño o lesión a la integridad física de las personas.

2. Las peleas; las riñas; los actos de gamberrismo, vandálicos o violentos; actos incívicos; o cualesquiera otros comportamientos de naturaleza análoga a los anteriores, cuando con independencia de la concurrencia de un resultado lesivo o dañoso, alteren la seguridad colectiva u originen desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos.
3. Las acciones u omisiones constitutivas de conductas obstruccionistas a las tareas de control, investigación o sanción de los agentes de la autoridad y poderes públicos en el ejercicio de sus funciones competenciales para el cumplimiento de la presente Ordenanza.
4. Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la presente Ordenanza o en la Ley Orgánica 1/1992 sobre protección de la Seguridad Ciudadana.

b) Conforme a lo previsto en el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, las infracciones a lo dispuesto por esta Ordenanza tendrán la consideración de leves.

Artículo 4.—De las sanciones

Las sanciones previstas para las infracciones reguladas en la presente Ordenanza, a tenor lo establecido en el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana, serán de multa de hasta 300 euros e incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones.

Artículo 5.—Principios generales

Las sanciones por infringir la presente Ordenanza se impondrán conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

En lo no contemplado en esta disposición se atenderá a los principios que regulan la potestad sancionadora recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6.—Intervenciones específicas

En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los Agentes de la Autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente los objetos y utensilios que hayan sido utilizados en la comisión de las infracciones, dándoles el destino que legalmente proceda.

Artículo 7.—Criterios para la graduación de las sanciones

Para la determinación de la cuantía de las sanciones previstas en esta Ordenanza, se tendrá en consideración la gravedad de la infracción, la cuantía del perjuicio causado y su posible trascendencia para la prevención, mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana y el principio de proporcionalidad.

Artículo 8.—Responsabilidad de las infracciones

Si una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas, tendentes a individualizar a la persona o personas infractoras, no fuera posible determinar el grado de participación de los diversos sujetos que hayan intervenido en la comisión de la infracción, la responsabilidad será solidaria.

Artículo 9.—Hechos constatados por Agentes de la Autoridad

En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la presente Ordenanza, las informaciones aportadas por los Agentes de la Autoridad que hubieren presentado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los inculpados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.—La Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Bilbao queda facultada para dictar cuantas instrucciones resulten precisas para la adecuada interpretación y aplicación de esta Ordenanza.

Segunda.—Se autoriza a la Alcaldía Presidencia, para que a través del Concejal Delegado en materia de Seguridad Ciudadana, mediante Resolución, se actualice la cuantía de las sanciones pecuniarias conforme sean actualizadas por la Administración Central.

Tercera.—La presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días de la publicación íntegra de su texto definitivo en el «Boletín Oficial de Bizkaia».